

MIGRACIÓN FORZADA DE COLOMBIANOS

Colombia, Ecuador, Canadá

COLOMBIA

Marta Inés Villa Martínez
Ana María Jaramillo Arbeláez
Luz Amparo Sánchez Medina

CORPORACION
REGION



FLACSO
ECUADOR

Primera edición

Septiembre 2007
Medellín, Colombia

Edita

CORPORACIÓN REGIÓN
Calle 55 N° 41-10
Teléfono: (57-4) 2166822
Fax: (57-4) 2395544
Medellín, Colombia
coregion@region.org.co
www.region.org.co

ISBN: 978-958-8134-36-9

Coordinación académica

Pilar Riaño Alcalá
Marta Inés Villa Martínez

Corrector de estilo

Álvaro Molina

Fotos

Archivo de la investigación

Coordinación editorial

Luz Elly Carvajal G.

Diseño e impresión

Pregón Ltda

Esta publicación tiene el apoyo de:
Centro Internacional de Investigación para el Desarrollo –Ciid–, Colciencias, Social Sciences and
Humanities Research Council, Canadá –Sshrc– y Agro Acción Alemana –AAA–

Impreso en papel ecológico fabricado con fibra de caña de azúcar

CONTENIDO

PRESENTACIÓN	7
INTRODUCCIÓN.....	11
PRIMERA PARTE	
CONTEXTOS DEL DESPLAZAMIENTO FORZADO INTERNO EN COLOMBIA.....	15
CONTEXTOS SOCIALES Y POLÍTICOS.....	17
Factores estructurales causantes del desplazamiento forzado	17
Los procesos históricos de violencia.....	19
PANORAMA DEL DESPLAZAMIENTO FORZADO:	
DINÁMICAS Y TERRITORIOS (1995-2005).....	20
Período 1995-1997.....	22
Período 1998-2002.....	23
Período 2003-2005.....	24
El desplazamiento hacia las fronteras.....	25
PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO DE LA POBLACIÓN	
DESPLAZADA EN COLOMBIA.....	28
Las tipologías.....	29
Los motivos	29
Autoría o responsables del desplazamiento	29
Bienes abandonados.....	29
Características de los hogares	30
Escolaridad	31
Estado de salud	310
Ocupación e ingresos.....	32
Vivienda	33
Redes de apoyo y organizaciones sociales	34
Necesidades.....	35
Intención de permanencia	35
Conclusiones.....	35
Referencias	36

SEGUNDA PARTE

EL DESPLAZAMIENTO FORZADO DESDE LA EXPERIENCIA DE LA POBLACIÓN.....	39
ESTUDIOS DE CASO.....	41
MEDELLÍN Y EL DESPLAZAMIENTO FORZADO.....	41
Medellín y el Área Metropolitana un panorama general.....	41
Medellín, ciudad receptora de población desplazada	43
Procedencia por regiones de la población desplazada	44
Ubicación de las personas en situación de desplazamiento en Medellín.....	44
Características sociodemográficas de la población desplazada en Medellín y el Área Metropolitana	45
Sobre la trayectoria organizativa de la población desplazada	46
Medellín, ciudad expulsora	47
Población desplazada en Medellín y el Área Metropolitana	47
Desplazamiento intraurbano en Medellín	48
El desplazamiento forzado intraurbano desde la experiencia de las personas afectadas.....	50
Los casos de estudio	51
Desplazamientos masivos.....	51
Desplazamientos individuales.....	54
El miedo, un sentimiento siempre presente en la experiencia del desplazamiento forzado.....	55
Antes de la salida forzada	56
La salida.....	59
Después	61
Con el desplazamiento forzado aumenta la vulnerabilidad de la población afectada.....	62
Los albergues.....	65
Lo horrible, lo inolvidable y lo irrecuperable. Miradas al pasado	70
Situaciones límite y pérdidas	71
Con respecto al futuro	73
Las representaciones sociales y autorrepresentaciones desde la población desplazada	74
Conclusiones	80
Referencias	81
URABÁ.....	82
Contexto general	82
Urabá, región construida por inmigrantes.....	83
Conflicto armado y desplazamiento	84
Urabá como lugar de expulsión y recepción de población desplazada.....	88
Condiciones de vida de la población desplazada en Urabá.....	90
Implementación de la política de atención a la población en situación de desplazamiento en Urabá	91
La experiencia del desplazamiento	92
Los miedos experimentados.....	93
Lugares marcados.....	93
Las muertes cercanas	94
La salida.....	96

La experiencia de la población en los lugares de recepción en Urabá	98
Estrategias de supervivencia.....	99
Las pérdidas	100
Percepciones y autopercepciones.....	101
La experiencia organizativa	101
El miedo al retorno	103
La experiencia de la población desplazada de Urabá en Medellín.....	103
Estrategias de supervivencia.....	105
Percepciones y autopercepciones.....	107
La experiencia organizativa	108
¿Reparación?.....	109
Conclusiones.....	109
Referencias	111
EL ORIENTE ANTIOQUEÑO.....	113
Contexto general.....	113
Conflicto armado y desplazamiento	114
Los lugares de recepción de población desplazada en el oriente	120
Características de la población desplazada	121
Implementación de la política de atención a la población en situación de desplazamiento en el Oriente Antioqueño	122
La experiencia del desplazamiento	123
Los miedos experimentados.....	124
Colaboradores a la fuerza.....	124
Por salvar los hijos.....	126
Entre balas, carros-bomba, bloqueos y masacres	126
La salida.....	130
La experiencia de la población desplazada en los lugares de recepción en el oriente.....	130
Estrategias de sobrevivencia.....	130
Iniciativas de organización	132
Percepciones y autopercepciones.....	133
La experiencia de la población desplazada del oriente en Medellín.....	133
Estrategias de sobrevivencia.....	134
Percepciones y autopercepciones.....	137
La experiencia organizativa	137
Las pérdidas	138
Los retornos	139
Conclusiones.....	141
Referencias	143
CONCLUSIONES ESTUDIOS DE CASO	144
TERCERA PARTE	
POLÍTICAS PÚBLICAS SOBRE DESPLAZAMIENTO FORZADO EN COLOMBIA.....	149
TEXTOS, REPRESENTACIONES, PRÁCTICAS.....	151
EL TEXTO: LAS POLÍTICAS DE DESPLAZAMIENTO.....	153
El desplazamiento forzado en América Latina	153
Derecho internacional y políticas públicas sobre desplazamiento forzado en Colombia...	156
Los principios rectores sobre el desplazamiento forzado.....	158

El desplazamiento forzado interno en la Constitución Política de Colombia	159
La Ley 387 y sus principales desarrollos normativos	159
Los componentes de la política pública sobre desplazamiento forzado	162
La prevención	162
La declaración y el ingreso al Sistema único de registro –Sur–	162
La atención humanitaria	164
El restablecimiento	165
El desplazamiento forzado en la jurisprudencia de la Corte Constitucional	167
REPRESENTACIONES SOCIALES Y POLÍTICAS PÚBLICAS:	
LA MIRADA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS	171
El lugar del sujeto: la interpretación de “alguien”	173
El problema: ¿el desplazamiento o los desplazados?	176
Los “destinatarios” de su acción: Los desplazados	177
Los verdaderos y falsos desplazados	178
Desplazados = oportunistas y dependientes	180
¿Los desplazados son víctimas?	182
Los desplazados como sujetos de derechos	183
Representaciones que guían la acción: incidencia en la implementación de las políticas públicas sobre restablecimiento	185
LA OTRA CARA DE LA MONEDA: LAS POLÍTICAS Y LOS FUNCIONARIOS VISTOS POR LA POBLACIÓN DESPLAZADA	187
La declaración: Un paso que se aprende	187
El registro: “Y me dieron la carta...”	189
La atención humanitaria: “Cuando llegan las ayuditas”	191
El restablecimiento	192
El retorno: entre la subsistencia y la muerte	193
Reasentamientos precarios: “Entre las necesidades las más”	194
Reparar lo irreparable... ..	197
La discriminación y el engaño	198
Aprender los derechos, ser ciudadanos	200
Las políticas como instrumento	202
Conclusión	203
Referencias	204
CONCLUSIONES GENERALES	207

PRIMERA PARTE

CONTEXTOS DEL DESPLAZAMIENTO FORZADO INTERNO EN COLOMBIA

Ana María Jaramillo Arbeláez
Marta Inés Villa Martínez

CONTEXTOS SOCIALES Y POLÍTICOS

El desplazamiento forzado de colombianos hacia el interior y el exterior del país es una de las expresiones más revelantes de la crisis humanitaria que se vive en Colombia y está asociado, de manera directa, con un conflicto armado que con particular intensidad se ha venido extendiendo por la geografía nacional desde de la década de 1980 hasta el presente. No obstante la expansión de este fenómeno, la afectación de diversos grupos de población, entre los cuales se cuentan campesinos, comunidades indígenas y afrocolombianas, no ha sido lo suficientemente reconocido en toda su dimensión e implicaciones ni por el Estado ni por la sociedad.

El reconocimiento de esta situación y de sus impactos en la sociedad pasa por hacer visible y comprender el fenómeno de la migración forzada de colombianos desde su complejidad, multicausalidad e historicidad. Esto exige, a nuestro modo de ver, la construcción de miradas relacionales que permitan, situar la especificidad del caso colombiano en un contexto mundial de aumento de los flujos migratorios y del usufructo económico de esta mano de obra, cierre de fronteras y restricción de los regímenes humanitarios de protección; comprender la relación entre estos procesos globales y contextos locales de expulsión en los que se conjugan factores estructurales y

coyunturales de corta, mediana y larga duración; y examinar la interacción entre diferentes ámbitos de la sociedad en los procesos de inclusión, exclusión y lucha por el reconocimiento de esta población.

El siguiente aparte busca ofrecer elementos para esta comprensión desde tres perspectivas: la de los factores estructurales que inciden en el desplazamiento; la de las dinámicas del desplazamiento forzado desde 1995 hasta el 2005 intentando dar cuenta de factores relevantes del contexto explicativo que dan lugar a este fenómeno y de las diferencias regionales en la manera como estos mismos factores se desenvuelven; y una aproximación a las características sociodemográficas de la población desplazada en Colombia.

Factores estructurales causantes del desplazamiento forzado

En Colombia la no resolución histórica del problema agrario ha implicado mayor concentración de la propiedad y su aprovechamiento como un factor especulativo acumulador y apropiador de rentas, en lugar de ser un bien de producción o de inversión, su utilización ineficiente (tierras de uso agrícola en ganaderías extensivas o tierras de vocación forestal

en ganadería), altos índices de pobreza rural muy superiores a los existentes en sectores urbanos, institucionalidad ineficiente y caótica, destrucción acelerada de los recursos naturales y poca participación de los pobladores rurales en los sistemas de decisión que afectan sus modos de vida (Machado, 2001:113).

Aunque estas tendencias estructurales han tenido una expresión diferenciada de acuerdo con las características de cada región, el común denominador es una mayor fragmentación de la mediana y pequeña propiedad (minifundización y microminifundización) y periódicos desplazamientos de población campesina, indígena y afrocolombiana hacia zonas de frontera y lugares inhóspitos con una diversidad de especies biológicas, pero con limitada potencialidad para prácticas agrícolas y pecuarias (Fajardo, s.f.).

Con los cambios que se han venido operando en la dinámica del capitalismo a nivel mundial, los avances en la tecnología y las nuevas demandas en recursos naturales y bioenergéticos, la cuestión agraria se torna más compleja de resolver y con repercusiones más negativas para las gentes del campo.

A partir de la década de 1970 y ante la urgencia de adecuación a las demandas que plantea la globalización, los gobiernos se interesan en la construcción de obras de infraestructura y en el ofrecimiento de ventajas a compañías multinacionales e inversionistas privados para la extracción de recursos naturales. A consecuencia de ello, numerosas poblaciones que habitan en estos territorios se ven forzadas a abandonar sus tierras, con la consecuente vulneración de derechos implicados. Muestra de ello es lo que ocurre con la proyectada construcción de obras de infraestructura, de importantes proyectos hidroeléctricos: en el Chocó biodemográfico, un canal interoceánico en la desembocadura del río Atrato hasta Riosucio; en el norte del de-

partamento de Antioquia la construcción de la hidroeléctrica de Ituango; con el proyecto de construcción de la troncal de los llanos que se uniría con la carretera marginal de la selva para comunicar por tierra las fronteras venezolana y ecuatoriana; y con una vía que uniría a Urabá con Maracaibo en Venezuela atravesando el Magdalena Medio (Bello, 2004:23) y (Sarmiento, 2001:106).

En cuanto a la explotación de recursos naturales, como lo han denunciado comunidades afrocolombianas, se viene produciendo una acelerada deforestación de territorios de la región del Pacífico por parte de compañías extranjeras y nacionales, como la Yirh japonesa y Maderas del Darién, y la dedicación de las mejores tierras para la implantación de cultivos de alta rentabilidad en el mercado internacional, como es el caso de los cultivos de la palma de aceite africana en territorios donde los paramilitares cometieron numerosas atrocidades con el propósito de desalojar a los grupos de población asentados en estos territorios.

La movilización de estas comunidades en defensa de sus tierras y los resultados de algunas investigaciones desarrolladas en el campo académico y por entidades del Estado pone en evidencia la relación existente entre la implantación de este tipo de empresas y el despojo violento de sus tierras a la población. Según el Ministerio de Agricultura, unas 25 mil hectáreas aptas para el cultivo de palma de aceite, adjudicadas por el Estado a las comunidades negras del Chocó, fueron adquiridas por terceros particulares (empresa Urapalma) mediante títulos privados ilegítimos. Dicho Ministerio además encontró títulos con firmas de gerentes del Instituto Colombiano de Reforma Agraria (Incora) que no existieron y otros con número de hectáreas superiores a las permitidas por la ley. También se hallaron títulos que nunca fueron registrados en la oficina de Instrumentos Públicos de Quibdó y otros casos de títulos que acreditaban mayor

número de hectáreas argumentando accesión, es decir, que el cauce del río altera el número de hectáreas del predio (El Tiempo, 2006).

El desplazamiento forzado es, además, en una estrategia para asegurar el control de territorios ricos en biodiversidad, recursos mineros, petroleros o para los cultivos de uso ilícito. Así lo demuestran los estudios realizados sobre el desplazamiento forzado por Pérez (2004), en los que se puede establecer una estrecha correlación entre zonas de desplazamiento con municipios que presentan estas características.

Como lo revela un informe de la Contraloría General de la Nación, el poder de narcotraficantes y paramilitares se traduce en una contrarreforma agraria con la compra de las mejores tierras del país —un 48%, mientras que el 68% de los propietarios (pequeños campesinos) sólo poseen el 5,2% del área—, de tierras localizadas en las zonas de frontera agrícola en las cuales se podían desarrollar cultivos ilícitos e instalar laboratorios para su procesamiento (Contraloría, 2006). Esto contrasta con la situación de familias desplazadas que según la Encuesta Nacional de Población Desplazada –Endop–, dicen haber tenido que abandonar propiedades que ascienden a las 569.548 hectáreas (Endop, 2003).

Los procesos históricos de violencia

En Colombia el desplazamiento forzado de población por causa de la violencia se constituye en un eje de pervivencia histórica (Conferencia Episcopal, 2001). De esta situación da clara muestra lo acontecido en la época de La Violencia (1946-1957) y los inicios del Frente Nacional —el pacto bipartidista mediante el cual se puso fin a la violencia— que se caracterizó por la implementación de la estrategia destinada a la eliminación de los últimos núcleos de resistencia bandolera² que

continuaban operando en varias regiones del país, lo cual produjo, entre otras consecuencias, la migración de cientos de miles de personas de zonas rurales hacia las ciudades. Es lo que se conoce como la primera oleada de migración en Colombia, lo que coincide también con otros procesos de urbanización en América Latina (Romero, 1986).

Según los cálculos de Oquist (1978), la cifra de refugiados por La Violencia ascendió a 2.003.600 personas. Por su parte, Gonzalo Sánchez (1986), afirma que la población que se vio forzada a emigrar por la violencia fue 2,2 millones para el período 1951 a 1964, uno de los flujos migratorios más altos del mundo para este momento. Sin embargo, en ambos casos se trata de una cifra que no se desagrega territorialmente, lo cual impide explicar las lógicas diferenciadas de la violencia y de los flujos migratorios (Bolívar, 2003).

Se trataba de campesinos, aparceros y arrendatarios que perdieron sus cosechas y siguieron un patrón de migración de corta distancia, es decir, de las veredas hacia las ciudades. El 61% de estos migrantes se concentraron en las ciudades de Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y en otras ciudades intermedias como Bucaramanga y Manizales. El resultado fue un cambio demográfico acelerado, con un predominio de la población urbana sobre la rural. Así mismo, se generaron movimientos migratorios hacia nuevas zonas de colonización como el Putumayo, el Cauca y Chocó, entre otras. También hubo grupos de población que emigraron hacia áreas de colonización espontánea en el Cauca, Putumayo, Huila, Meta y Bolívar.

Entre las consecuencias del desplazamiento, Oquist pudo establecer el abandono forzo-

2. El fenómeno del bandolerismo alude a la existencia de bandas o cuadrillas de campesinos que surgieron en los años de la Violencia y que se caracterizaban por la comisión de actos de extrema crueldad y sevicia contra poblaciones campesinas. (Sánchez y Meertens, 1982).

so de la tierra, una marcada disminución de los precios de finca raíz resultante de la venta condicionada por el miedo y el afán de huir, aún en los casos en los que no se presentaba amenaza concreta. Los más afectados con la pérdida de sus tierras fueron minifundistas, aparceros y arrendatarios que perdieron sus cosechas y caficultores empobrecidos. Las ciudades cumplieron un papel clave como lugar de refugio para aquellas personas y familias que llegaron en busca de protección y con la expectativa de un mejoramiento de sus condiciones de vida.

PANORAMA DEL DESPLAZAMIENTO FORZADO: DINÁMICAS Y TERRITORIOS (1995-2005)

A diferencia de los años cincuenta, la violencia se encuentra asociada no con los partidos políticos, liberal y conservador, sino con las agrupaciones guerrilleras que emergen desde los años sesenta (las Farc, el EPL y el ELN) y a partir de la década de 1980 con los paramilitares o grupos de autodefensa que bajo diversas denominaciones hacen presencia en regiones con dominio o influencia de las guerrillas; con el papel del narcotráfico en esta confrontación; y con el intento de la fuerza pública estatal por ejercer o recuperar el control en zonas dominadas por estos grupos.

Para la década de 1990 se observa un escalamiento del conflicto armado, con expresión en territorios localizados en áreas que revisten una importancia estratégica desde el punto de vista militar y económico para los actores armados, lo cual empieza a tener una repercusión en los desplazamientos de población.

En 1995 la Conferencia Episcopal publicó uno de los primeros informes que se conocen en Colombia sobre el fenómeno del despla-

zamiento forzado en el que se hablaba de alrededor de 586.261 personas en situación de desplazamiento y del drama humanitario en el que se encontraban Conferencia Episcopal, 1995). Este estudio contribuyó de manera significativa a la visibilización de la problemática del desplazamiento forzado y de la necesidad de construir políticas de Estado para enfrentarla.

Uno de los temas que mayor debate ha generado es el de la magnitud del fenómeno, relacionado, entre otros aspectos, con el número de personas afectadas que han sido obligadas a emigrar forzosamente, con las características de esta población, con el territorio tanto de la expulsión como en la recepción de la población, con el tipo y el valor de pérdidas a los que alude este drama humanitario y, en consecuencia, lo que se requería para su reparación. En otras palabras, con la dimensión cuantitativa del fenómeno.

A pesar de que siguen habiendo grandes falencias en el conocimiento de estas dimensiones del fenómeno del desplazamiento forzado, sin duda alguna desde 1995 hasta ahora también se han producido avances importantes en el acopio sistemático de información que permita dar cuenta de algunas de estas variables, especialmente de la cantidad de personas desplazadas, los territorios de expulsión y recepción, las dinámicas del desplazamiento y las características sociodemográficas de la población. Existen, en este sentido, varios sistemas y fuentes de información reconocidos hoy en el país.

En primer lugar, el Sistema Único de Registro –SUR– a cargo de la Consejería para la Acción Social (antes Red de Solidaridad Social) que es el instrumento oficial del gobierno para rastrear la situación del desplazamiento forzado; tiene información desde 1995, pero sólo se consolida a partir del 2000. Su principal característica es que se basa en la información de las personas que presentaron de-

claración hasta un año después de ocurrido el desplazamiento.

En segundo lugar, está el Sistema de Información sobre Desplazamiento Forzado y Derechos Humanos en Colombia –Sisdhes–, manejado por la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento, Codhes, el cual realiza el procesamiento de información sobre población desplazada en Colombia mediante tres estrategias principales: monitoreo de fuentes secundarias (medios de comunicación, informes institucionales), verificación en cada caso particular e información de hogares en situación de desplazamiento; recoge información desde 1985 y produce informes trimestrales.

En tercer lugar, está el Sistema de Información sobre Población Desplazada por la Violencia (RUT³) operado por el Secretariado Nacional de Pastoral Social de la Conferencia Episcopal; desde 1997 procesa información obtenida en sus parroquias relacionada con la caracterización de la población desplazada y produce informes trimestrales; estos tres son los sistemas más consolidados y de los que se cuenta con mayor información. No obstante, también otros organismos como la Cruz Roja Internacional producen información a partir de las entrevistas realizadas a quienes acuden a esta institución en búsqueda de ayuda humanitaria; Acnur produce información relacionada con lo que denominan su “población de interés” que son las personas beneficiarias de sus programas; y las personerías municipales, algunas de las cuales han venido realizando en los últimos años una labor de análisis y producción de estadísticas basadas en las declaraciones presentadas por la población desplazada ante estos organismos a nivel local (Piffano, 2005)

Si bien el contar hoy con estos sistemas de información es un avance indudable, también es cierto que, dado que cada uno cuenta con

parámetros teóricos y metodológicos diferentes, no son muchas veces comparables aunque sí contrastables. Un ejemplo de esto son las cifras absolutas producidas por Codhes y Acción Social, entre 1995 y el 2005, como se verá a continuación:

Tabla 1. Cifras del desplazamiento 1995-2005 según Acción Social y Codhes

PERÍODO	RED DE SOLIDARIDAD SOCIAL	CODHES
Anteriores a 1995	55	720.000
1995	251	89.000
1996	2.582	181.000
1997	15.273	257.000
1998	35.790	308.000
1999	31.653	288.000
2000	332.055	317.375
2001	375.905	341.925
2002	425.067	412.553
2003	221.455	207.607
2004	163.005	287.581
2005	168.898	252.801
Total	1.786.748	3.662.842

Fuentes: Consejería Presidencial para la Acción Social, 2007; Codhes, 2005:5.

Como puede observarse, las cifras de Codhes casi duplican las de Acción Social. Sin embargo es necesario considerar: 1) como se ha señalado, las cifras obedecen a métodos diferentes de registro; 2) mientras que Codhes reporta información desde 1985, para Acción Social la cifra oficial es la de 1995; esto arroja una diferencia de entrada de un poco más de 700 mil personas entre los dos sistemas; 3) si bien en la mayoría de años el reporte de Codhes es mayor, en el período 2000 a 2003 es ligeramente menor; 4) en el período 2004-2005 las diferencias entre uno y otro sistema vuelven a ser notorias.

A pesar de estas consideraciones, el asunto es más político que técnico y constituye, co-

3. Toma su nombre del nombre bíblico Ruth.

mo lo señala Harvey Suárez (2005:12) un aspecto nodal en la orientación de las políticas públicas: de la calidad de la información suministrada depende, en buena medida, el tipo de respuestas sociales e institucionales a la problemática. Las cifras nos hablan por tanto, más que de una realidad, de la manera como esta es interpretada y cómo se pretende incidir en ella. Como lo sugiere Victoria Sanford, de las respuestas que se den a interrogantes como ¿Qué es el desplazamiento forzado?, ¿a quiénes vamos a contar como desplazados forzados?, ¿cómo vamos a contarlos?, ¿por qué vamos a contarlos? y ¿quién va a decidir cómo contarlos?, dependen tanto las cifras sobre el desplazamiento forzado como su uso (Suárez, 2005:30).

La descripción que se presenta a continuación sobre las dinámicas del desplazamiento forzado y el perfil de las personas desplazadas en Colombia admite también este análisis. Lo que se pretende es presentar un panorama en el que interesa destacar, más que las cifras absolutas, las tendencias y las interrelaciones de elementos explicativos que sirvan de marco para entender no únicamente el desplazamiento interno, también el éxodo de colombianos hacia el exterior⁴.

Período 1995-1997

Antioquia y la Costa Atlántica aparecen como epicentros de los procesos de desplazamiento en este período. La relevancia de Antioquia se corresponde con el escalamiento del conflicto armado en Urabá y al finalizar este período en el bajo Atrato y el occidente de Antioquia. En la Costa Atlántica se destacan los departamentos de Córdoba, el sur del departamento de Bolívar y el Magdalena. Está en juego el control sobre áreas estratégicas cercanas a Urabá, el nudo del Paramillo y los Montes de María

En el sur del país se perfila una tendencia similar en los departamentos del Meta y Ca-

sanare. Aquí se combina la acción de grupos de autodefensa local con una expansión de las Autodefensas Unidas de Colombia, al mando de Carlos Castaño.

También en el departamento del Guaviare las autodefensas incursionan con el objetivo de eliminar la presencia de las Farc y tomar el control del negocio de la coca. Una masacre ocurrida en Mapiripán es el primer acto que marca su llegada; allí muere una cantidad indeterminada de habitantes del casco urbano y de la zona rural, y sus cadáveres son arrojados al río Guaviare. Pero esto no es sino el comienzo de una situación que se agudizará notablemente a partir del 2002, como consecuencia de las fumigaciones que generan a la vez que desplazamiento, una expansión de los cultivos hacia el Guaviare y Nariño.

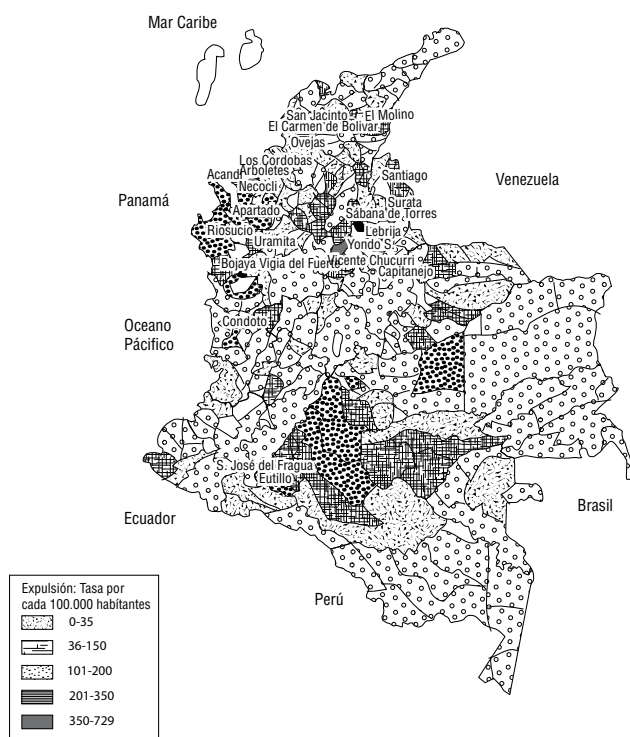
En el departamento de Putumayo la región epicentro del conflicto armado es el Bajo Putumayo, en particular el Valle del Guamuez, centro de producción de coca y con una situación estratégica fronteriza, zona de retaguardia y para el transporte de armas y de coca.

También desde 1996 el departamento del Cauca se insinúa como epicentro del desplazamiento, especialmente en la región noroccidental-río Naya que comunica con el río San Juan, y más arriba por el río Atrato con el municipio de Buenaventura en el Valle del Cauca y con el departamento del Chocó (Pacífico). Este es el comienzo de una ofensiva paramilitar que en el período siguiente involucra el área del Macizo Colombiano y de la Bota Caucana en el conflicto armado y en los

4. Para esto nos basaremos principalmente en las estadísticas oficiales producidas para el período 1995-2005 por la Agencia presidencial para la Acción Social y por el Observatorio de Derechos Humanos de la Vicepresidencia de Colombia; en los boletines producidos por Codhes; en el estudio realizado por Codhes y la Conferencia Episcopal sobre el desplazamiento forzado entre 1995-2005; y en el estudio realizado por investigadores de la Universidad de los Andes (Ibáñez y Moya, 2006) sobre pobreza y desplazamiento forzado.

desplazamientos de población. En la figura 1 se pueden apreciar las regiones más afectadas por el desplazamiento correspondiente a este primer período.

Figura 1. Municipios expulsores, 1995



Fuente: Conferencia Episcopal-Codhes, 2006

Entre tanto, Bogotá, Antioquia, Córdoba Santander y Tolima aparecen, según los datos de Acción Social, como los principales departamentos receptores. Codhes, por su parte, resalta para este período la relevancia de la Costa Atlántica como lugar de expulsión y recepción de población desplazada proveniente de las zonas antes mencionadas de los departamentos de Antioquia (Urabá), los santanderes, Meta y Guaviare. Los principales polos de atracción son las ciudades de Montería⁵, Barranquilla y Cartagena, centros de llegada de población desplazada de la región de los Montes de María, de Córdoba, de la zona de Urabá y más recientemente del Chocó (Codhes, 1999).

Estos flujos de población, como observa Codhes (1999), se corresponden con circuitos migratorios entre poblaciones de Antioquia, Córdoba y Chocó; Bolívar, Antioquia y Santander; Cesar, los santanderes y Arauca; Córdoba, Sucre, y Cesar. Estos circuitos se relacionan con tendencias migratorias intra-regionales construidas a través de relaciones históricas de vinculación de localidades.

Período 1998-2002

El rasgo característico de este período es una profundización de las tendencias que se habían perfilado: mayor expansión del conflicto armado, de los desplazamientos y una profundización de la crisis humanitaria. Tanto Codhes como Acción Social coinciden en la identificación de una tendencia hacia el aumento de la población desplazada, con el año 2002 como su punto más alto: 425.067 personas desplazadas según el SUR y 412.553 personas según el Sisdhes.

No hay departamento que escape a este fenómeno. Sin embargo se presentan variaciones de acuerdo con las microrregiones más afectadas por la disputa, siendo las más importantes las del Oriente Antioqueño, la Sierra Nevada de Santa Marta, Montes de María, el Urabá ampliado y el centro del Chocó, el Bajo Putumayo y la Bota Caucana.

Desde una perspectiva territorial se puede constatar una generalización del desplazamiento, ya que en el año 2000, en 480 municipios se presentan eventos de desplazamiento; en el 2001, en 819; y en el primer semestre del 2002, en 887. Para el total del período, el 87% del territorio nacional fue afectado por el desplazamiento.

Pero no todos los municipios se ven impactados de la misma manera. En unos 122

5. En 1997 se calculó que el 40% de los desplazados provenían de la zona de Urabá y de sitios limítrofes con el noroccidente del departamento de Antioquia (Codhes-Conferencia Episcopal, 1999).

se concentra la dinámica de expulsión y recepción del 75% de la población desplazada. Esto coincide con la emergencia de nuevas zonas en disputa, que por lo general corresponden a zonas de cultivos de coca y corredores que facilitan una movilidad de los actores armados (sur del Tolima, Caldas, Cauca, Nariño, Putumayo, Arauca) y hacia la frontera con Venezuela (norte de Santander). Está en disputa el control de territorios en el área de construcción de la represa La Miel en Caldas y de los puertos de Buenaventura y Tumaco en el Pacífico.

En el Meta se agudiza el desplazamiento a partir de 1998 en áreas de influencia histórica de las Farc (La Uribe, Vista Hermosa, Mesetas y La Macarena, y San Vicente del Caguán) y en Putumayo debido a la intensificación de la disputa entre las Farc y autodefensas por el control de la zona de La Hormiga, clave en la economía de la coca, cercana a frontera con Perú y Ecuador.

Antioquia, sin embargo, sigue ocupando el primer lugar en cuanto a departamentos expulsores. Este período se caracteriza, además, por la emergencia de la región del Oriente Antioqueño como zona en disputa, lo que acarrea un notable fenómeno de desplazamiento en esta región.

En comparación con el período anterior se evidencia una dramática tendencia decreciente en el retorno. Desde un índice del 37% en el 2000 se pasa al 11% en el 2002 y a solamente el 2% en el primer semestre del 2002. Esta imposibilidad de retorno genera una altísima demanda sobre los recursos disponibles para la reubicación en nuevos asentamientos, generalmente las grandes ciudades.

Esta es la etapa de mayor afectación de las comunidades indígenas y afrodescendientes. Entre los años 2000 y 2002 el 20,5% de la población desplazada corresponde a grupos étnicos, 17,72% a población negra y 3,75% a población indígena.

Desde la dinámica de los lugares de recepción, Bogotá continúa como la principal ciudad receptora, seguida por Medellín, Cali y ciudades intermedias como Montería, Cartagena, Santa Marta, y Quibdó que recibe el impacto de una masiva migración forzada proveniente de áreas rurales.

Período 2003-2005

Aunque con discrepancias en las cifras de desplazamiento producidas por los sistemas de información del Sisdhes, de Codhes y del SUR de Acción Social, y sobre todo, en la interpretación que se hace de estas, se coincide en reconocer una tendencia a la disminución del desplazamiento en este período (Ver Tabla 1).

Para Codhes, esta tendencia a la disminución en las cifras tiene que ver con el concepto de desplazamiento con el que se operan los sistemas de información y particularmente con la postura del gobierno colombiano de negar la inclusión en el SUR de las personas desplazadas por las fumigaciones de cultivos de uso ilícito, por otras acciones relacionadas con el control militar de territorios por parte del ejército y que derivan, igualmente, en dinámicas de desplazamiento forzado, y finalmente por la negativa a reconocer la existencia de un conflicto armado (Piffano, 2005). En el 2003 se alcanza uno de los porcentajes más altos de personas no incluidas en el sistema: 23,31%. No obstante, en departamentos como el Chocó y Norte de Santander, en este mismo año, los porcentajes llegan a ser de 56% y 51% respectivamente. Entre tanto, los departamentos de Huila, Tolima, Quindío, Caquetá, Cauca, Risaralda, Putumayo, Nariño, Caldas y la ciudad de Bogotá se encontraban por encima del promedio nacional (23,31%), justo los departamentos donde se registraba para ese año, según el SUR, un mayor descenso en las cifras de desplazamiento (Piffano, 2005:74). Para Acción Social, en contraste, la disminución en la magnitud del

desplazamiento es demostrativa de la eficacia de la estrategia de seguridad democrática traducida en un control de los grupos insurgentes y en la presencia de las fuerzas armadas y de otras instituciones del Estado en territorios en disputa.

En todo caso, el epicentro de los desplazamientos forzados de población se traslada en este período hacia los departamentos del suroriente del país, zona de operaciones del Plan Patriota: Caquetá, Meta, Putumayo; y hacia los departamentos de extensión de ese Plan: Norte de Santander y Arauca; Cauca, Tolima y Huila. Las operativos militares, los enfrentamientos, el aumento de la siembra de minas antipersonas para prevenir la avanzada de la fuerza pública en la región por parte de las Farc y las fumigaciones⁶ generan nuevos desplazamientos.

Para el 2003, otro asunto que emerge con fuerza es el del desplazamiento intraurbano e interurbano como resultado de diversas formas de conflicto armado en los centros urbanos. Medellín, Barranquilla, Barrancabermeja y Cali son algunos de los ejemplos más significativos en este sentido. A esto se suman otras modalidades de desplazamiento, especialmente en las comunidades indígenas, las cuales, no obstante haber luchado por permanecer en sus territorios a pesar del conflicto, pasan por situaciones insostenibles que han llevado a que se configuren varios tipos de desplazamiento: en su propio territorio, hacia territorios no indígenas dentro del territorio nacional y, en algunos casos, hacia zonas fronterizas con otros países.

Para el año 2005, Codhes (2005a:5-8) señala varios elementos que configuran las tendencias de este período:

- Profundización de la crisis humanitaria pese a desmovilización de grupos armados paramilitares. El intento de la guerrilla por recuperación de territorios, la mayor mili-

tarización de zonas por parte del ejército y la continuidad de la acción de grupos paramilitares convierten una porción importante del territorio en zonas de riesgo.

- La continua expansión de redes del narcotráfico articuladas con los grupos armados irregulares, principalmente por el Litoral Pacífico, que ocurre paralela al traslado y resiembra de cultivos de uso ilícito. Esto da lugar al deterioro de la situación humanitaria en la región y muestra que la política de erradicación forzada no es una respuesta suficiente para combatir el fenómeno que está en estrecha relación con el conflicto armado.
- Como resultado de todo lo anterior, se registra un “desbordamiento” del conflicto, especialmente hacia los países vecinos. Esto se relaciona con la expansión de cultivos hacia Perú y Bolivia y del narcotráfico hacia las fronteras. También con la articulación de redes transnacionales del crimen organizado con los grupos armados irregulares. El desbordamiento del conflicto armado y su impacto internacional que se manifiesta en desplazamientos transfronterizos, cuyas repercusiones están afectando las relaciones internacionales de Colombia con los países vecinos.

El desplazamiento hacia las fronteras

El desplazamiento hacia las fronteras empieza a ser objeto de seguimiento a finales de los

6 Si bien es cierto, como observa Codhes, que la relación entre fumigaciones y desplazamiento no es de causa-efecto, sí es posible afirmar que el contexto en el que se desarrollan las fumigaciones y los métodos utilizados para llevarlas a cabo sí han sido factores que inciden en el desplazamiento forzado de población. Las operaciones militares que anteceden a situaciones de fumigación se convierten en un factor de riesgo para la población civil que se encuentra en medio del fuego cruzado (Codhes, 2005b:34).

noventa por parte de Acnur, las Naciones Unidas y Codhes. En el primer gran informe publicado en 1997 sobre desplazamiento se destacan eventos de desplazamiento hacia la frontera con Panamá, en el marco de la confrontación Farc y autodefensas por el control de Urabá.

Pero el trato que recibieron las personas que huyeron a este país fue poco hospitalario por parte del gobierno de Panamá que junto con el gobierno colombiano acordaron la repatriación a un albergue en el municipio de Apartadó, en un hecho que causó preocupación internacional porque se puso en riesgo la seguridad de las personas trasladadas. A partir del 2001 se perfila una tendencia a la diversificación de los desplazamientos hacia varios lugares de fronteras. Al finalizar el año 2002 el Acnur da cuenta de la preocupación de los países vecinos que se quejan de la “extensión” del conflicto colombiano a sus territorios con las incursiones de grupos armados, el crimen en aumento, la inseguridad, el tráfico de drogas y la entrada irregular pero continua de colombianos que intentan escapar del conflicto o que buscan oportunidades económicas en Ecuador, Panamá y Venezuela, y en menor grado en Perú y Brasil. Acnur retoma un dato de la Asociación Nacional de Instituciones Financieras –Anif– según el cual para el 2002 habían salido del país unas 158.000 personas, miles de ellas solicitando asilo en Latinoamérica, Europa y en otros lugares.

Para el 2003, el desplazamiento hacia la frontera con Ecuador empieza a registrar un incremento considerable ante las fumigaciones y la ofensiva militar en el sur. Aunque este flujo de desplazados no es nuevo, se hace visible porque empieza a ser monitoreado como uno de los impactos de la implementación del Plan Colombia.

La migración de colombianos también se incrementa hacia Venezuela desde la Guajira y norte de Santander, y se dirige hacia ciudades como San Cristóbal, Zulia, Táchira y Apure;

buena parte de esta población se encuentra en condición de ilegalidad. Esto introduce un cambio en el fenómeno de migración por tratarse de una población afectada por la violencia y por los desplazamientos masivos, cuando lo que había primado eran los desplazamientos individuales o de pequeños grupos ubicados en las zonas de mayor beligerancia (Universidad Central de Venezuela, 1999:67).

El desbordamiento del desplazamiento hacia las fronteras plantea una situación delicada para Colombia en sus relaciones con los vecinos y para los países receptores. En esto también juegan las percepciones sobre las amenazas que representa este fenómeno, especialmente cuando se asocia con el aumento de la criminalidad, el tráfico ilegal de armas y de precursores químicos.

Según Acnur, entre 1999 y el 2004 más de 90 mil colombianos(as) presentaron solicitudes de asilo en países de frontera y en otros continentes (Acnur, 2006)⁷. La encuesta mundial de Refugiados de EEUU, por su parte, reporta para el 2006 un total de 257.900 refugiados (US Comité for Refugees, 2006). Entre los países receptores de población refugiada procedente de Colombia se destacan EEUU con 19.667, Canadá con 13.511 y Ecuador con 9851 (Acnur, 2006).

En síntesis, mientras según el sistema de información de Codhes las personas desplazadas en Colombia en la última década fueron 2.942.842 (para un acumulado total de 3.663.842), la información gubernamental habla de 1.786.748⁸. Independiente de las diferencias existentes entre uno y otro sistema de

7. Ecuador: 28.742 personas; Estados Unidos: 18.967; Costa Rica: 12.802; Canadá: 10.844, España: 5.142; Reino Unido: 3.631; Venezuela: 1.739; Panamá: 853, y otros países: 8.167 personas. En: Acnur. “Principales países receptores de solicitantes de asilo colombianos”. Infografía Cifras. Citado por Conferencia Episcopal, Codhes, 2006:60.

8. En este informe la cifra que se reporta como proveniente del SUR es de 1.716.662, tomada en enero del 2006. La cifra que se incluye es la que aparece en las estadísticas consultadas en enero del 2007.

información, lo cierto es que ambos coinciden en que se trata de un fenómeno continuo y, excepto unos períodos cortos, en ascenso. Pero además, de un fenómeno que, año tras año, se ha ido extendiendo por casi todo el territorio nacional. A los departamentos expulsores identificados en el estudio de la Conferencia Episcopal en 1994 fueron incorporados en las dinámicas de la confrontación armada y otras formas de violencia en el transcurso de la década 1995-2005 los departamentos de Chocó, Putumayo, Risaralda, Quindío, Atlántico, Guajira, Vichada, Guainía, Vaupés y Amazonas. En la figura 2 se pueden apreciar las regiones más afectadas por el desplazamiento forzado en este período.

Figura 2. Municipios expulsores, 2005



Fuente: Conferencia Episcopal-Codhes, 2006

Los lugares de recepción también se incrementaron considerablemente en la última

década: todos los departamentos del país, incluido el Archipiélago de San Andrés y Providencia, recibieron población desplazada. No obstante, los principales núcleos de reasentamiento corresponden a las principales ciudades capitales y ciudades intermedias (Conferencia Episcopal, Codhes, 2006:26). El mapa de la figura 3 nos permite apreciar los 50 municipios más afectados por la recepción de población desplazada desde el momento de agudización del desplazamiento (1995) hasta el año 2005.

Figura 3. Municipios receptores de población desplazada (1995-2005)



Fuente: Conferencia Episcopal-Codhes, 2006

A pesar de que el dato sobre el incremento de los departamentos expulsores y receptores es ya de por sí demostrativo de la magnitud de la problemática, tanto los contextos que han producido el éxodo como sus impactos son

diferenciados. Esto es un asunto nodal en la manera como se enfrenta el problema. Quizás por esto, la Defensoría del Pueblo insiste en la necesidad de que se produzcan replanteamientos no sólo en la acción, sino en la comprensión del fenómeno, y para esto es vital un acercamiento que pueda detenerse en las diferentes modalidades, características e impactos del desplazamiento forzado: “Por lo tanto, no es correcto hablar del desplazamiento forzado en Colombia, es necesario comprender que se trata de los desplazamientos forzados en Colombia y la política pública debe ser capaz de dar cuenta de la variedad de estos fenómenos que implican modalidades distintas de atención” (Defensoría, 2004:20).

En este sentido, para la Conferencia Episcopal y para Codhes (2006:29) el impacto provocado por la expulsión o la recepción de población en situación de desplazamiento varía según el número de habitantes del municipio, la capacidad de respuesta local y la dinámica del conflicto, entre otras. Por eso, la lectura de las dinámicas de expulsión y recepción plantea otros resultados cuando es hecha no desde las cifras absolutas, sino en la relación entre estas y el número total de habitantes (tasas por cien mil habitantes) (Conferencia Episcopal, Codhes, 2006:29). Una aproximación de este tipo permite hacer visibles otras geografías del desplazamiento forzado y de la manera como el conflicto armado ha afectado las pequeñas localidades a lo largo y ancho del país, generando un profundo reordenamiento territorial. Pero, como dice la Defensoría del Pueblo, es necesario cruzar esta lectura territorial con otros componentes sociales:

La importancia de las variables sociales como referente explicativo de las migraciones no puede ser soslayada. La gente no emigra exclusivamente porque haya tomas, ataques, amenazas u otras acciones semejantes. Lo hace, además, porque las circunstancias sociales

en el sitio en que habían decidido vivir no les ofrecen oportunidades de progresar. Por eso el tema del desplazamiento forzado significa de manera más amplia para las políticas públicas del país un inmenso interrogante sobre el tema del ordenamiento territorial de la nación en su conjunto. (Defensoría del Pueblo, 2004:37).

PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO DE LA POBLACIÓN DESPLAZADA EN COLOMBIA

Una vez descritas las dinámicas históricas y territoriales del desplazamiento forzado, es necesario preguntarse ¿Y quiénes son las personas que conforman esas cifras, esas rutas de expulsión y recepción? ¿Cuál es el rostro humano de este drama? Lo que se intentará a continuación es un acercamiento a algunos tópicos que permitan dar cuenta de quiénes son las personas desplazadas de este país y, hasta cierto punto, los impactos que en ellas ha tenido el desplazamiento forzado, aunque este será un punto que se abordará con mayor profundidad en los estudios de caso⁹.

9. Para esto se retoman varios insumos: primero, La Encuesta Nacional de Población Desplazada (Endop) realizada en el 2003 en virtud de un acuerdo interinstitucional entre la Red de Solidaridad Social, Codhes, Pastoral Social realizan una encuesta nacional sobre población desplazada, la cual arrojó una información detallada sobre el perfil sociodemográfico de la población desplazada con base en una muestra de hogares desplazados tomada en 13 ciudades. Segundo, las caracterizaciones realizadas por los sistemas de información de la Conferencia Episcopal (RUT), Acción Social (SUR) y Codhes (Sisdhes) recogidas en el balance citado sobre el desplazamiento forzado de 1995 al 2005 (Conferencia Episcopal, Codhes, 2006). Y tercero, el estudio realizado por investigadores de la Universidad de los Andes (Ibáñez y Moya, 2006) en el que, a partir de la aplicación de una encuesta a 2.322 hogares de población desplazada ubicados en 48 municipios y 21 departamentos de Colombia, se compara la situación de los hogares antes y después del desplazamiento y su situación con respecto a la de la población pobre e indigente.

Las tipologías

Un aspecto relacionado con las características del desplazamiento es el **tipo del desplazamiento**: se habla de desplazamiento masivo cuando se trata de más de cincuenta personas o diez familias y obedecen, por lo general, a amenazas muy específicas e identificables; esto hace que, en términos generales, cuenten con mayores posibilidades de atención estatal e institucional y se den a conocer a través de los medios de comunicación. El desplazamiento individual, unifamiliar o “gota a gota”, como también se le ha llamado, es mucho menos visible y requiere de sistemas diferentes de identificación, pues en la mayoría de los casos se trata de una acción silenciosa y en la que se cuenta con menos posibilidades inmediatas de apoyo institucional y reconocimiento social. Según la Conferencia Episcopal y Codhes (2006:76), la tendencia mayoritaria en todas las regiones es hacia el desplazamiento familiar. La región pacífica (según datos del SUR) y la región de Amazonía y Atlántico (según datos de Codhes) son las zonas en las que más predominan los desplazamientos masivos.

Los motivos

Según la Encuesta Nacional (Endop, 2003), el 39% de los hogares entrevistados fueron desplazados por amenazas, por enfrentamientos armados el 23% y por asesinatos o masacres el 18%. Las amenazas son un factor común en todos los municipios de la muestra, los enfrentamientos son especialmente altos en Buenaventura y Popayán y los asesinatos o masacres en Medellín, Turbo y Soledad.

Autoría o responsables del desplazamiento

De acuerdo con el balance realizado por la Conferencia Episcopal y Codhes, en el período 1995-2005 las diversas guerrillas aparecen como el principal autor de desplazamientos,

representando entre 43% y 52% del total de actores identificados en el Sistema RUT y Codhes. La proporción atribuida a las autodefensas varía según la fuente, siendo mayor su actuación en la población incluida en el sistema de información de Codhes (41,6%) y menor en el sistema de RUT (27%). La responsabilidad asignada a integrantes de la fuerza pública es muy baja (1,1% en el sistema RUT y 4,8% en Codhes). También en la Encuesta Nacional (Endop, 2003) se coincide en señalar a la guerrilla como principal responsable. Sin embargo, al observar los datos por municipio, las autodefensas obtienen el porcentaje más alto entre los desplazados de Medellín (9%), Barranquilla (58%), Turbo (61%) y Soledad (47%). En ambas encuestas, un dato importante es el de “Otros”, que en el caso del sistema RUT alcanza un porcentaje del 28% y comprende grupos armados no identificados o cuando la respuesta es “no se sabe o no responde”, lo cual se corresponde con la constatación de la dificultad que tienen las personas desplazadas para identificar al actor responsable de su desplazamiento.

Bienes abandonados

Uno de los elementos más importantes y del que menos información se tiene es el relacionado con las pérdidas ocasionadas por el desplazamiento forzado (bienes materiales e inmateriales), un asunto central a la hora de pensar en procesos de reparación. No obstante, hay aproximaciones especialmente relacionadas con los temas de propiedades y tierras abandonadas que permiten hacerse a una idea al respecto.

Según la información procesada por Codhes, del 70% de las familias que dieron información al respecto, dos terceras partes dejaron abandonada una finca o una parcela con casa, el 20% su vivienda y el 3,9% una finca sin casa. Los datos más altos de abandono de tierras se encuentran en la Región del Pacífico

(67%), seguido de la Región Central (51,4%) y Amazonía (47,9%) (Conferencia Episcopal, Codhes, 2006). Estos datos, aunque parciales, permiten explicar el enorme significado que tiene el asunto de las tierras para gran parte de la población desplazada, no sólo como un medio de subsistencia, sino en su sentido de arraigo e identidad social y cultural.

Características de los hogares

Como se dice en relación con las tipologías de desplazamiento, la tendencia mayoritaria es a que este proceso se emprenda por familias, aún cuando después del desplazamiento muchas de estas se disgreguen en los sitios de llegada¹⁰. El número de personas por hogar varía según la fuente: 4,9 (Sistema RUT), 4,4 (SUR) y 3,7 (Codhes). En la mayoría de casos se trata de familias nucleares conformadas por jefaturas de hogar, cónyuge e hijos; sin embargo el alto porcentaje de jefaturas femeninas (32%) puede estar sugiriendo también una tendencia significativa a hogares monoparentales (Codhes, Conferencia Episcopal, 2006:66-68).

En términos de género hay coincidencia en señalar que la mitad de la población son hombres y la mitad mujeres; además en que, de estos, un porcentaje importante de población (cerca del 50%) son menores de edad (Conferencia Episcopal, Codhes, 2006:67). Esto plantea la necesidad de políticas públicas diferenciales hacia este segmento poblacional, además, sugiere una reflexión importante sobre lo que implica para el presente y el futuro del país que un porcentaje tan alto de niños y jóvenes guarden ya en su memoria las historias de violencia y desarraigo que supone el desplazamiento forzado.

La condición de conyugalidad también permite una aproximación a las características de los hogares de la población desplazada. Según el estudio de la Conferencia Episcopal y de Codhes (2006:69) ella difiere según el sexo: entre las mujeres, el 55% se encontraba

sin compañero, en comparación con el 6% de hombres sin pareja. Se identificó además una elevada incidencia de viudez entre las mujeres: ocho veces mayor que entre los hombres. Esto se corresponde con las múltiples evidencias de que, en efecto, han sido los hombres las principales víctimas de infracciones al Derecho Internacional Humanitario y violaciones a los derechos humanos (homicidios, desapariciones forzadas y masacres, entre otras) y que son en muchos casos las mujeres las que toman la decisión de desplazarse como forma de salvaguardar su vida y la de sus hijos.

En el estudio realizado por investigadores de la Universidad de los Andes (Ibáñez y Moya, 2006) se coincide, con muy pequeñas diferencias, en las características poblacionales de los hogares desplazados y en relación con pobres urbanos e indigentes, como se puede apreciar en la tabla 2.

Tabla 2. Estructura de los hogares desplazados

Variable	Desplazados ¹	Pobres urbanos ²	Indigentes urbanos ²	Pobres rurales ²
Tamaño del hogar	5.3	4.4	4.4	4.7
Número de menores de 14 años	2.1	1.5	1.7	1.9
Número de personas entre 14 y 60 años	2.9	2.6	2.4	2.5
Número de personas mayores de 60 años	0.3	0.3	0.3	0.3
Jefatura femenina	39.0%	35.7%	37.5%	22.7%
Jefe de hogar viudo	8.0%	10.5%	11.6%	10.2%
Tasa de dependencia	1.0	0.6	0.7	0.8
Años de educación del jefe de hogar	5.7	5.8	4.9	3.0
Años de educación de otros miembros mayores de 18 años	4.3	6.4	5.4	3.6
Escolaridad máxima en el hogar	8.2			
Hogares que pertenecen a una minoría étnica	16.4%	9.3%	10.5%	13.6%

¹ Cálculo de los autores con base en Edhd- 2004

² Cálculo de los autores con base en ECV-2003

Fuente: (Ibáñez y Moya, 2006)

10. Se hace referencia, por ejemplo, al recurso de repartir los hijos donde diferentes familiares mientras se consigue un lugar para toda la familia; a hijos y esposos que se van a otras regiones en búsqueda de trabajo; a altos índices de separación de parejas ocurridas después del desplazamiento.

Para los autores de esta investigación, las características de los hogares de población desplazada en conjunto constituyen una situación de alta vulnerabilidad de la población desplazada, incluso en relación con la población pobre e indigente. Este mayor grado de vulnerabilidad —entendido por los autores como el riesgo de que un hogar no pobre, lo sea en el futuro o de que un hogar pobre permanezca siéndolo en el futuro (Chaudri, Jalan y Suryahadi, 2002, citado por Ibáñez y Moya (2006:25)— es lo que para los autores justifica que, tal y como lo ha señalado la Corte Constitucional —y como se verá en el capítulo referido a las políticas públicas— haya una acción positiva frente a esta población.

Escolaridad

El análisis de la escolaridad de la población desplazada tiene que ver tanto con el nivel educativo alcanzado antes del desplazamiento como con el acceso que han podido tener a la educación, después del desplazamiento, en las zonas de llegada.

En cuanto a la asistencia escolar, con los datos suministrados por Codhes, RUT y Acción Social para el período 1995-2005 se llega a la conclusión de que hay, en efecto, una disminución de la asistencia escolar, especialmente entre los adolescentes. Sólo los datos de Codhes registran un aumento de la asistencia escolar: entre niños de 0 a 4 años (aunque la cobertura sigue siendo apenas del 5%) y entre niños de 5 a 7, rango en el que se incrementa casi un 9%.

El estudio de Ibáñez y Moya coincide con el balance realizado por Codhes al señalar que, en efecto, hay una tendencia al aumento de la asistencia escolar que llega al 54% entre la población menor de 18 años, lo cual puede ser explicado por la mayor oferta educativa existente en los centros urbanos hacia donde se dirige esta población. No obstante, los autores realizan dos consideraciones relevantes:

en primer lugar, a pesar del aumento, la tasa de asistencia escolar de la población desplazada es menor que la de los pobres rurales y urbanos y los indigentes. En segundo lugar, este aumento en la asistencia se da sobre todo entre menores que asisten a la escuela, pero en cambio disminuye entre quienes van a secundaria. Esto puede indicar, de un lado, que muchos de estos jóvenes están involucrados en labores de sostenibilidad económica de las familias y de otro, las dificultades que encuentra esta población no tanto en el ingreso a los establecimientos como en su permanencia, dados los altos costos de la canasta escolar¹¹.

Otro referente es el del nivel educativo. Aunque según el estudio de Codhes y la Conferencia Episcopal (2006) esta es una temática sobre la que los registros tanto del RUT como del SUR presentan una notable ausencia de información, es posible construir un perfil educativo según el cual alrededor de la mitad de la población apenas ha cursado estudios primarios y entre el 13% y el 21% han llegado a secundaria; la proporción de población con estudios superiores es del 1,0%, aunque se encontraron algunos casos excepcionales de personas con estudios de postgrado (197 personas en el Sistema SUR); entre una décima y una cuarta parte no han cursado estudios formales y muy probablemente muchas de estas personas son analfabetas, lo cual muestra una tasa muy elevada si se compara con la tasa nacional que es del 8% en promedio y del 12% en las zonas rurales.

Estado de salud

La aproximación a las condiciones de salud de la población desplazada tiene diferentes entradas: el tipo de enfermedades que pa-

11. Sobre los costos de la canasta escolar, ver el estudio de caso realizado en la ciudad de Medellín en una zona con un porcentaje alto de población desplazada (Echavarría y Luján, 2006).

dece esta población y la afiliación al sistema de protección y seguridad social son los datos en los que hay mayor coincidencia en los diferentes sistemas de información.

El cuestionario base de la encuesta del Sistema RUT, analizado en el balance de la Conferencia Episcopal y Codhes, indaga sobre morbilidad durante el desplazamiento. Según él, una tercera parte (37%) de las personas, sin diferencia entre hombres y mujeres, manifestaron haberse sentido enfermas en el momento de la entrevista o durante el desplazamiento (2006:85). En la encuesta realizada para el estudio de Ibáñez y Moya (2006), cerca del 19% de las personas reportan haber contraído una o más enfermedades nuevas desde el desplazamiento. De estas enfermedades, las más comunes son fiebre (75,4%), diarreas (53,3%) y problemas respiratorios (32,5%), enfermedades por lo general relacionadas con problemas de nutrición y deficientes condiciones de saneamiento básico de los hogares (2006:18).

En cuanto al ingreso o no al sistema de protección de salud encontramos diferencias. Según el estudio de la Conferencia Episcopal y Codhes, el 47% (según el SUR)¹² y el 54% (según Codhes) no tienen ningún tipo de protección en salud. Las demás obtienen protección a través del régimen subsidiado (35,6% según el SUR y 37,5 según Codhes) y a través del régimen contributivo (entre el 17% y 2%) (2006:86).

Ibáñez y Moya encuentran en este tema varios asuntos contrastables: se observa que en los municipios receptores el acceso al SGSS mejora considerablemente, ya que el 67% de los hogares desplazados se encuentran afiliados, mientras que en el municipio de origen este porcentaje sólo llegaba al 46,6%. De hecho, la mejoría en las condiciones de salud es tal que la tasa de afiliación es superior que aquella de la población pobre e indigente urbana.

Ocupación e ingresos

En este punto se hace referencia tanto a los cambios en las actividades económicas antes y después del desplazamiento como a los niveles de ingreso percibidos. La información presentada al respecto por la Conferencia Episcopal y Codhes denota una notable reducción (equivalente al 36%) de la proporción de personas que tenían trabajo, pues pasan de 3.104 a 1.983 trabajadores. Entre tanto, la proporción de personas que buscan trabajo se quintuplica, lo que significa un incremento del 485% (2006:87).

Según el estudio de Ibáñez y Moya, el porcentaje de jefes del hogar desempleados aumenta del 1,7% en el municipio de origen al 16,1% en el receptor; para otros miembros del hogar mientras la tasa de desempleo era del 6,9% en los municipios de origen, en los municipios receptores llega a ser del 12%. Un factor explicativo de esta situación es la poca correspondencia entre los mercados laborales urbanos y los conocimientos y capacidades de la población desplazada que encuentra que sus conocimientos no son requeridos en los centros urbanos; además, cuando se llega a conseguir empleo esto ocurre en condiciones de inestabilidad y baja remuneración. También los bajos niveles de escolaridad contribuyen a este resultado. Eso obliga a la población desplazada y especialmente a los jefes de hogar a cambiar su ocupación laboral y a trabajar en empleos informales con condiciones precarias, cuando lo logran. Resulta comprensible que, en estas condiciones, el desplazamiento tenga también un impacto directo en el nivel de ingresos. Según los resultados de esta investigación, mientras que en los municipios de origen el ingreso laboral por adulto estaba alrededor de \$ 2,2 millones, en el municipio receptor este ingreso desciende a \$ 959 mil,

12. Se aclara, sin embargo, que en el caso del SUR hay un 85% de omisión en las encuestas referido a este tema.

es decir, que después del desplazamiento los hogares reciben menos del 56,9% del ingreso que devengaban en los municipios de origen. Resumiendo: el desplazamiento hace a los hogares más vulnerables frente a la pobreza, puesto que aún para aquellos hogares que llevan viviendo más de un año en los municipios receptores, el desempleo en la población desplazada es mayor que en la población pobre urbana; esto genera una cadena de exclusiones en tanto no se puede garantizar el acceso a bienes y servicios esenciales, tales como la educación, la salud y unas condiciones de vivienda aceptables (Ibáñez y Moya, 2006:11-15).

A una conclusión similar se llega en el estudio de la Conferencia Episcopal y Codhes sobre ingresos mensuales. Según esta fuente, el mayor porcentaje de la población desplazada encuestada, casi un 90%, está concentrada en los ingresos entre \$ 0 y \$ 50.000 mensuales, en pesos del año 2003, lo cual da un promedio mensual de \$35.013 por persona que informa. De acuerdo con este nivel de ingresos promedio es posible afirmar que la gran mayoría de la población en situación de desplazamiento recibe menos de un dólar por día, lo que significa que se encuentra por debajo de la línea de pobreza y bordeando la de indigencia (2006:89).

Vivienda

El tema de la vivienda constituye una pieza fundamental en la comprensión de las condiciones de vida de la población desplazada. Con ello se hace referencia al elemento físico, pero también a su significado en cuanto lugar de arraigo y pertenencia. Constituye un elemento central para entender lo que significa el restablecimiento para la población desplazada. A pesar de esto, en ninguno de los sistemas de información que se ha referenciado hasta el momento (RUT, Acción Social, Codhes) se hace alusión a este tema. Sólo el estudio referenciado de Ibáñez y Moya da cuenta de las condiciones de la población en

este campo. De lo allí planteado destacamos lo siguiente:

- El acceso a servicios públicos tales como energía eléctrica, acueducto, alcantarillado y recolección de basuras en los municipios receptores es significativamente más alto que en los municipios de origen, lo cual puede explicarse por una mayor oferta de servicios en las ciudades con respecto al campo. Sin embargo, la cobertura para los hogares desplazados es considerablemente menor frente a los pobres urbanos e incluso frente a los indigentes urbanos. Esta situación tiende a empeorar con el tiempo, dado que en los primeros meses contaban con el apoyo de familiares o subsidio de vivienda, pero después, a causa del bajo nivel de ingresos, la situación tiende a empeorar.
- Otro de los indicadores es el del hacinamiento: el porcentaje de hogares que enfrentan hacinamiento alto se duplica, al pasar de un 23,3% en el municipio de origen a un 40,7% en el municipio de recepción.
- Los materiales de la vivienda son también peores: mientras que el 63,8% de los hogares tenían viviendas que contaban con paredes de buena calidad en el municipio de origen, en los municipios receptores dicho porcentaje disminuye al 58,7%.
- El tipo de vivienda: en los municipios de origen la gran mayoría de los hogares (89%) vivían en casas y en los receptores dicho porcentaje cae al 69%. Como consecuencia del desplazamiento, es mayor el número de hogares que pasan a vivir en cuartos, en inquilinatos o en otro tipo de estructuras. Al comparar estas cifras con aquellas para la población pobre urbana e indigente urbana, se observa que las condiciones de vivienda de la población desplazada son aún más precarias que las de los hogares pobres y los hogares indigentes en los municipios receptores.

Redes de apoyo y organizaciones sociales

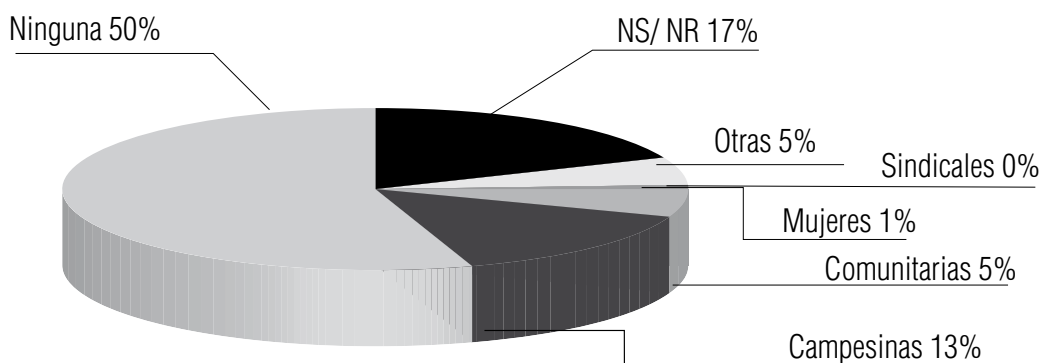
Según el estudio de Ibáñez y Moya, las familias encuestadas llevaban viviendo en los lugares de origen alrededor de 16 años. Uno de los efectos tangibles del desplazamiento forzado es la desestructuración del tejido social, la pérdida de lazos sociales, sentidos de pertenencia y reconocimiento social alcanzado durante ese tiempo. Lo que algunos han denominado *Capital Social*.

Una de las expresiones de lo que significa este impacto es el de la pertenencia a organizaciones comunitarias. De acuerdo con este estudio, mientras que en los municipios de

origen el 21,7% de la población participaba en alguna organización comunitaria, tres meses después del desplazamiento sólo el 10,1% lo hacía, y una vez los hogares se habían asentado en los municipios receptores, la participación era del 17,9% de la población. Sin embargo, se presenta una recomposición en el tipo de organizaciones a las cuales se afilian. La participación en el municipio expulsor se centra en organizaciones de caridad¹³.

Como lo refleja el sistema de información RUT (figura 4), se coincide con la tendencia predominante, pero se ofrece mayor especificidad sobre el tipo de organizaciones en las que participa la población desplazada después del desplazamiento en los lugares de recepción.

Figura 4. Participación de la población desplazada en organizaciones comunitarias después del desplazamiento.



Fuente: Sistema de Información RUT. Diciembre del 2003.

13. No queda claro en el estudio cuál es el sentido que se da a esta noción. Corresponde en todo caso a lo que en otros estudios se han descrito como organizaciones centradas en la búsqueda de formas de subsistencia cotidiana.

Aunque el porcentaje de familias que se encuentran de alguna manera asociadas es bajo, la concentración de familias que hacen parte de organizaciones campesinas se encuentra en las regiones suroriental, Valle del Cauca, nororiental y centro. Por su parte, las familias de desplazados pertenecen a asociaciones comunitarias, principalmente en las regionales Valle del Cauca y suroriental, mientras que la mayor concentración de organizaciones de mujeres a las cuales pertenecen se encuentra en la regional del nororiente.

El tema de las Organizaciones de Población Desplazada, OPD, toma especial relevancia en los últimos dos años, en parte como repuesta a las presiones ejercidas por la propia población y por la Corte Constitucional para hacer efectiva las orientaciones de la ley referidas a la participación de la población desplazada en el Sistema Nacional de Atención a la Población Desplazada, Snaipd. No contamos en el momento con información cuantitativa sobre el impacto de estas disposiciones, pero sin duda alguna es un asunto que adquiere mayor centralidad, por lo menos como reto y como pregunta.

Necesidades

Aunque lo descrito hasta el momento ofrece ya una mirada sobre la situación de la población desplazada y por tanto también sobre sus falencias y necesidades, en el estudio de la Conferencia Episcopal y Codhes se encuentra una aproximación explícita al respecto que es pertinente referenciar.

En la población incluida en el Sistema de Codhes, la principal necesidad identificada es contar con un empleo y medios para trabajar, con un 31,5%, que, como se vio en el punto referido a la ocupación e ingresos, es un punto clave en el eslabón de la calidad de vida y de él depende notoriamente la posibilidad de satisfacer otras necesidades. En un segundo ni-

vel se encuentran las necesidades relacionadas con la salud física y mental, y con el suministro de medicamentos, señaladas por el 17,2% de las personas, seguidas por la educación de los hijos e hijas en el 13,6% de los casos.

Intención de permanencia

Un dato importante que sintetiza en buena medida el presente y el futuro de la población tiene que ver con su intención de retorno o permanencia. De acuerdo con la información del Sistema RUT, el 64,7% de las familias desean permanecer en el sitio en donde residen; otro 21,7% desean otro lugar de residencia; tan sólo el 12,4% quieren volver a su localidad de origen, y el 1,2% manifiestan su intención de salir del país (Conferencia Episcopal, Codhes, 2006:96).

Conclusiones

Esta aproximación a las causas explicativas del desplazamiento forzado y sus dinámicas —teniendo en cuenta temporalidades y expresiones territoriales, así como características de los grupos de población afectados y en comparación con lo acontecido en los años de La Violencia— nos permiten llamar la atención sobre algunos asuntos:

A factores estructurales —como el problema agrario y modelo de acumulación capitalista inequitativo y excluyente de la población campesina, comunidades indígenas y afrocolombianos— se agregan otras variables relacionados con el narcotráfico, mayor concentración de la propiedad de la tierra y un nuevo auge de grupos armados ilegales que han hecho del ejercicio del terror y los desplazamientos de población una estrategia para el logro de sus objetivos.

Como sucedió en los años de La Violencia, se ha producido un rápido proceso de expansión del conflicto armado y la emergencia de epicentros de la violencia. Al mismo tiempo hay una diferencia por la importancia que ad-

quieren las áreas de frontera en el contexto de la globalización por su biodiversidad y sus tierras aptas para el desarrollo de grandes proyectos agroindustriales (palma africana) y los cultivos de coca.

El conflicto armado, como en la época de La Violencia, ha permeado regiones más integradas por su desarrollo a la trama nacional y una mayor presencia del Estado. Pero también es cierto que ha llegado a afectar regiones inhóspitas, habitadas por comunidades indígenas y afrocolombianas, como ha ocurrido con la región de bajo y medio Atrato.

La apelación a métodos atroces como las masacres, el estilo de rematar a las víctimas procediendo a su descuartizamiento y a los cortes de franela, los incendios de fincas y las violaciones durante el apogeo de La Violencia llegó a ser considerada como expresión de barbarie que se creyó haber dejado atrás con el pacto del Frente Nacional. No obstante, el recurso a este tipo de prácticas por parte de los nuevos protagonistas de la violencia vuelve a poner de presente las huellas de una tradición de ejercicio de violencia en la cual el blanco es la población civil, con una particular afectación a los grupos de población más vulnerables; de mujeres y menores de edad.

En los años cincuenta y en los comienzos del Frente Nacional lo predominante fue la modalidad del desplazamiento individual de las veredas hacia las cabeceras municipales y luego hacia las ciudades capitales. En el presente se observa una tendencia similar, aunque con un mayor peso de los desplazamientos masivos. Mientras que en los desplazamientos “gota a gota” se oculta la dimensión del drama vivido por la población, los desplazamientos masivos acaparan la atención de los medios de comunicación y la ayuda humanitaria de diversas entidades nacionales e internacionales. El mayor contraste radica en la aparición de otras variantes mencionadas en las tipologías: los confinamientos y los desplazamientos intraurbanos.

Como la anterior generación de refugiados de la violencia, las nuevas generaciones de desplazados se han localizado en la periferia de las ciudades. Sin embargo, sus vidas transcurren en muchas ocasiones bajo la reedición de las experiencias de miedo y terror experimentadas en sus lugares de origen ante el acoso de los actores armados, el hecho de vivir en zonas de alto riesgo y la probabilidad de verse sometidos a nuevos procesos de desplazamiento.

Con todo, la capacidad de adaptación y de resistencia de la población desplazada, así como la acción desplegada por organismos internacionales y por sectores sociales en el país, se constituyen en un factor favorable al reconocimiento, lo cual supone un cambio con respecto al olvido histórico y desconocimiento de las víctimas de la violencia que se impuso medio siglo antes, aunque, al momento actual continúa siendo incierta la posibilidad de hacer de la verdad, justicia y reparación de las víctimas una realidad.

Referencias

- Acnur, 2006. La situación de los refugiados en el mundo. Desplazamientos humanos en el nuevo milenio. En: <http://www.Acnur.org/biblioteca/pdf/4832.pdf>
- Bello, M. (2004). El desplazamiento forzado en Colombia: acumulación de capital y exclusión social. En: Desplazamiento forzado, dinámicas de guerra, exclusión y desarraigo. Bogotá, Universidad Nacional, Acnur.
- Bolívar, I. (2003). Violencia política y formación de Estado. Ensayo historiográfico sobre la dinámica regional de la violencia de los cincuenta en Colombia, Bogotá, Cinep, Cesó, Uniandes.
- Codhes. (1999). Colombia un país que huye, desplazamiento y violencia en una nación fragmentada. Bogotá.
- Codhes. (2003). Desplazados, ni seguridad ni democracia, boletín N° 47 (en línea) Disponible en: www.codhes.org.co, consulta realizada en marzo del 2005.
- Codhes. (2004). Desplazados y confinados en Colombia. Disponible en: www.codhes.org.co, www.codhes.org.co, consulta realizada en junio del 2005.
- Codhes. (2005). La política del avestruz, boletín N° 58 (en línea) Disponible en: www.codhes.org.co, consulta realizada en marzo del 2005.
- Codhes. (2005a). Situación de conflicto y desplazamiento en las fronteras. El cerco se cierra (en línea). Disponible en: www.codhes.org.co, consulta realizada en junio del 2005.
- Codhes. (2005b). Desplazados en el limbo, boletín N° 56 (en línea). Disponible en: www.codhes.org.co, consulta